

La educación en la encrucijada

Juan J. Dolado

(Dpto. de Economía, Universidad Carlos III)

Si España realmente desea alcanzar un nuevo modelo productivo al final de la profunda recesión actual, resultan necesarias inversiones adicionales¹ pero, sobre todo, mejoras en la eficiencia de sus sistemas educativos que aseguren un crecimiento sostenido y una mayor cohesión social basada en la igualdad de oportunidades, un logro que todavía está lejos de alcanzarse. La idea de que los países desarrollados podrán continuar compitiendo en las mismas condiciones con otras economías intensivas en trabajo poco cualificado y con bajos salarios no parece viable. Países como China o India están aumentando la calidad de su fuerza laboral a gran velocidad. La combinación de mejores cualificaciones y salarios todavía reducidos es un reto que solo puede afrontarse flexibilizando y mejorando la calidad de nuestro sistema educativo, de manera que el conocimiento y la información lleguen a la mayoría de los ciudadanos.

Desde la llegada de la democracia, el avance en el acceso a la educación en nuestro país ha sido impresionante. En 1980, la proporción de personas entre 25 y 64 años que no habían completado el bachillerato superior era del 89% (56% en la UE) mientras que el 8% tenían estudios universitarios (UE: 12%). En la actualidad, dichos porcentajes son del 58% (UE: 34%) y 24% (UE: 22%), respectivamente. En las universidades españolas hay casi 1,4 millones de estudiantes, una cifra muy similar a la de Alemania (o Francia) con la mitad de población. Un avance tan sustancial en la acumulación de capital humano conlleva necesariamente disfunciones transitorias. El problema es los desajustes temporales se conviertan en permanentes. La primera disfunción se refiere a la primacía de la “cantidad” sobre la “calidad”. La segunda, al deterioro progresivo de los contenidos de los programas educativos y a los problemas de gestión y financiación de los centros educativos.

Educación Infantil

Los estudios neurológicos y económicos (liderados por el Nóbel James H. Heckman) sobre el desarrollo de las capacidades de aprendizaje en edades tempranas (0-3) han puesto de manifiesto que la educación infantil es un medio extremadamente eficaz para sentar las bases del aprendizaje posterior, prevenir el abandono escolar y reducir las desigualdades educativas derivadas

del estrato socioeconómico familiar. Si bien, ha habido avances sustanciales durante la última década, las tasa de escolarización en la fase inicial (0-2), situada alrededor del 18% (aunque en CCAA como el País Vasco alcance el 47%), están todavía muy alejadas de la media de la UE (25%). Además, a diferencia de lo que ocurre en los posteriores niveles educativos, y también en la mayoría de la UE, los centros privados son mayoritarios (57%). De hecho, se ha producido un progresivo efecto “expulsión” de aquellas familias con niveles de renta cercanos a las que dan acceso a los centros públicos como consecuencia del boom inmigratorio. Aunque existe un plan de aumento sustancial de este tipo de plazas (*Plan Educa3*, con el objetivo de ofrecer 300 mil nuevas plazas de guarderías durante 2008-2012 por parte de la administración central y las CCAA), su desarrollo ha sido mínimo por el momento. Resulta crucial que se ponga en marcha y logre su objetivo.

Educación Primaria y Secundaria

Por lo que respecta a los dos siguientes niveles educativos, la ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años y el acceso creciente de un alumnado procedente de la inmigración posteriormente han supuesto los dos retos principales a los que se han venido enfrentando gobiernos centrales y autónomos de uno y otro signo. El éxito logrado ha sido escaso, dado que España es uno de los países de la UE con mayor tasa de fracaso escolar en el bachillerato: un 29% de estudiantes abandonan la educación secundaria post-obligatoria (de los cuales un 14% solo alcanza estudios de primaria) frente a un 15% en la UE.

La secuencia de reformas LOGSE- LOCE- LOE han abordado el problema desde diferentes ópticas ideológicas: unas con un enfoque tendente a la integración, descuidando a cambio la calidad y empeorando la disposición de los alumnos ante el proceso de aprendizaje. Otras, con un enfoque más elitista, endureciendo las condiciones de la enseñanza pública y favoreciendo a la enseñanza privada (representa un 8%) y concertada (25%), pero sin ofrecer medios e incentivos suficientes a la pública (67%).

El resultado final ha sido un progresivo deterioro de los conocimientos que aporta la ESO, fenómeno plasmado en los mediocres resultados que nuestros alumnos obtienen en las comparaciones internacionales (estudios PIRLS y PISA). La aprobación de la LOE en 2006 con el voto en contra del principal partido de la oposición, puso de manifiesto la dificultad de lograr consensos. Resulta incomprensible que, frente a los déficit de rendimiento educativo

acumulados durante las dos últimas décadas, los ejes centrales de la polémica se hayan centrado, por un lado, en si la asignatura de Religión deba o no ser curricular (en una sociedad laica) o, por otro, en si Educación para Ciudadanía (bastaría una asignatura donde se estudiaran los artículos de la Constitución) deba ser el caballo de batalla de la nueva reforma. Todo ello mientras que la proporción de alumnos sin los mínimos requeridos en lectura (26%), ciencias (20%) o matemáticas (25%) supera en 3 o 4 puntos porcentuales a la media de la UE. Sin embargo, frente a la opinión generalizada de que existe una tendencia uniforme hacia la mediocridad, cabe apuntar que ello no es cierto: existe una distribución bi-modal de rendimientos donde los buenos estudiantes son mejores que lo eran antes mientras que los malos estudiantes son definitivamente mucho peores.

Los árboles no nos dejan ver el bosque. Nos olvidamos de otros temas de mucho mayor calado, como son: (i) la recuperación de la cultura del esfuerzo mediante incentivos adecuados, (ii) la existencia de los controles centralizados (hay que recuperar urgentemente la antigua reválida a los 14 años a nivel nacional abolida en 1975), (iii) la oferta de vías de acceso a enseñanzas secundarias de formación profesional al acabar la primaria (la ratio de alumnos en FP y universidad es 1:3 en España, frente a 1:1 en la UE), (iv) el reforzamiento del aprendizaje de los idiomas extranjeros (todavía un 55% de la población española no habla ninguno), (v) la financiación generosa de grupos de apoyo para los alumnos desaventajados, (vi) el uso de tecnologías modernas en la transmisión de conocimiento (solo en el 8% del tiempo en clase se utilizan las TICs), en combinación con el necesario esfuerzo memorístico y el trabajo en casa, y (vii) el reforzamiento de la figura del profesor mediante su formación y reciclaje continuo. En definitiva, se trata de enfatizar el mensaje inequívoco de que la educación no es algo lúdico sino costoso. Estas son las recetas del éxito en países como Corea o Finlandia, los líderes de PISA. Se trata de extender a la educación pública lo que ya ofrece la privada y concertada, para que compitan en igualdad de oportunidades, eliminando la baja movilidad social que impera en el sistema actual donde la renta familiar es un indicador excelente de la elección de tipo de colegio.

Educación terciaria

Si hablamos de regresión social clasista, qué decir del sistema de financiación nuestro sistema universitario. Un estudiante en la universidad pública cuesta aproximadamente unos 4.700 € y paga como matrícula unos 700 €, alrededor

de un 15% del coste. Es decir, cada alumno, con independencia de su nivel socioeconómico familiar y de su rendimiento académico, recibe un subsidio anual de 4.000 € del contribuyente (la penalización por repetir convocatorias es muy baja). La justificación de este subsidio descansa tradicionalmente en la existencia de una externalidad positiva para la sociedad (mayor productividad y cohesión social, mejor salud, etc.) que no se financiaría privadamente. Sin embargo, aunque el sistema impositivo sea progresivo, la financiación actual resulta catastróficamente regresiva y completamente ineficiente. El rendimiento salarial de un año adicional de educación universitaria es del 7-10% anual (mayor que el de la gran mayoría de activos financieros) mientras que el rendimiento social es del 1-3%. Estas cifras parecen interpretarse al revés en España puesto que implican que el estudiante debería sufragar un 70% del coste de su formación en vez del 15% actual. Frente al sistema anglosajón de matrículas elevadas o préstamos-renta que financien becas para los alumnos con talento de reducida capacidad económica (España destina a becas el 0.08% del PIB, mientras que la UE destina el 0.25%), aquí tenemos una política de “café para todos”, donde la obtención de un título en una buena o mala universidad importa poco, como tampoco importa el retraso en completar una titulación.

Las cifras de fracaso escolar en la universidad vuelven a ser escandalosas: un 30% de los alumnos abandonan después de 2 años sin obtener titulación alguna y solo un 30% acaban una licenciatura de 4 años en dicho período (la duración media es de 6 años). Con un flujo de entrada anual de 250 mil alumnos y un stock de 1,38 millones en 2008, ello implica un desperdicio anual de 8.238 millones de euros al año, casi el 0.75% del PIB.² Si a ello sumamos un 29% de abandono en secundaria, el coste agregado se eleva a cerca del 1% del PIB *cada año*.

En este sentido, la universidad privada (23 de 73 universidades, ofreciendo el 16% de las titulaciones) no ha supuesto una vía de mejora. A diferencia de los colegios privados, generalmente es de baja calidad. Acoge en muchos casos al alumnado con medios económicos sin nota para acceder a la pública y en aquellos donde su prestigio docente es elevado, su calidad investigadora es casi nula.³

A su vez, la financiación de las universidades públicas depende fundamentalmente del número de alumnos (90%) y poco de la calidad de su docencia e investigación (10%). Si a ello unimos un mercado laboral dual presidido por la precariedad de los jóvenes, el resultado es un grado de “sobre-

educación” (cerca del 25%) muy elevado, donde la educación superior ha perdido buena parte de su capacidad de señal de las habilidades del individuo. Muchas carreras están sobresaturadas de contenidos y de falta de demanda, dando lugar a notas de acceso muy bajas. Los desajustes se mantienen en el tiempo y el exceso de formación muy específica dificulta la reinserción de los trabajadores en caso de pérdida del empleo a diferencia, por ejemplo, de EE.UU. donde una formación mucho más flexible y diversificada (*majors*) permite encontrar empleos en ocupaciones alternativas sin gran pérdida salarial.

Frente a la posibilidad de reformar el número de carreras, sus contenidos y la excesiva duración de los las mismas, el Proceso de Bolonia ha supuesto otro sonado fracaso. La posibilidad de acceder al mercado laboral tras un grado de 3 años, con conocimientos mas transversales, y que la especialización (*masters* de 2 años) venga posteriormente vía una mayor competencia entre universidades (este es el sistema masivamente adoptado por 43 de los 46 países firmantes del Acuerdo de Bolonia) se ha decidido mantener el status quo de grados de 4 años. Los grados de 3 años hubieran reducido sustancialmente el fracaso escolar, recuperando buena parte de la pérdida de PIB anual comentada anteriormente. También hubiera supuesto un foco de atracción de estudiantes extranjeros, prácticamente inexistentes (2% frente al 15% en EE.UU o RU). Sin embargo, una reforma de este tipo chocaba frontalmente con los intereses de un profesorado corporativista, todavía seleccionado mayoritariamente de forma endogámica (¿hasta cuando funcional?), con escasa actividad investigadora (pero con excepciones muy destacadas) que solo desea mantener sus privilegios de antaño (asignaturas = financiación) con la ayuda de instituciones garantes de arcanos y esencias de otros tiempos.

Solo un sistema mucho más competitivo - con mayor libertad en la fijación de matrículas y duración de grados (como ha venido ocurriendo con las licenciaturas donde coexisten las de 4 y 5 años), así como un sistema salarial mucho mas flexible dentro de los límites presupuestarios (públicos y privados) de cada institución, una financiación pública que de mucho mas peso a la calidad y no a la cantidad, y una potenciación de la FP superior como vía de acceso mucho mas eficiente para muchos alumnos que fracasan en la universidad - conseguirá sacarnos del marasmo actual.

Conclusión: La educación es el motor de bienestar y está en una encrucijada. El mundo es indiferente a la tradición y la reputación pasada. Solo escogerán el

camino del éxito aquellos países que, ignorando las quejas de aquellos que se resisten a perder sus privilegios, estén dispuestos a implementar cambios sustanciales.

¹ El gasto público en educación es alrededor de 4.3% del PIB, un punto porcentual inferior al de la UE. El gasto en educación terciaria representa casi el 1.1% del PIB frente al 1.5% en la UE.

² Dicha cifra surge de la siguiente operación: $4000 \times \{0.3 \times [250.000 \times 2] + 0.7 \times [1.380.000 \times 2]\}$, donde 0.3 representa el 30% del flujo de estudiantes nuevos que abandona al cabo de 2 años sin licenciarse en nada, y 0.7 representa el 70% del stock de estudiantes universitarios que emplean 2 años más de lo necesario para acabar una titulación. El PIB en 2008 era de 1.1 trillones de euros

³ Véanse los *rankings* del diario EL MUNDO, donde, sobre 150 instituciones prestigiosas en 50 titulaciones universitarias, solo aparecen 9 privadas en 2008 y ninguna en los primeros lugares